

# **XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES**

**“Balance de los procesos electorales 2017 – 2018”**

**Tema IV: “Justicia electoral y vida interna de los  
partidos”**

**Propuesta de ponencia:**

**ELECCIONES Y SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL**

**Que presentan:**

**CARLOS SERGIO QUIÑONES TINOCO**

**BRENDA FABIOLA CHÁVEZ BERMÚDEZ**

**STEPHANIE GUERRERO RAMÍREZ**

**6, 7, 8 Y 9 de Noviembre de 2018**

**Monterrey, Nuevo León**

## **ELECCIONES Y SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL**

### **ELECTIONS AND ELECTORAL JUSTICE SYSTEM**

**Carlos Sergio Quiñones Tinoco**

**Brenda Fabiola Chávez Bermúdez**

**Stephanie Guerrero Ramírez**

#### **1. Las elecciones y su función legitimadora del ejercicio del poder político**

Las elecciones son la fuente de legitimidad del gobierno y de la representación en los órganos legislativos en la medida en que generan confianza y son percibidas como imparciales, transparentes y justas; son, según lo dicho, la fuente de legitimidad del ejercicio del poder político y del sistema político. Esto implica que cada elector debe gozar de libertad para elegir y tener además la oportunidad para hacerlo en cada elección que se realice. La fuerza legitimadora de las elecciones deriva del sistema electoral, el que no debe provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen la dinámica política, como podría ocurrir con la sobrerrepresentación de la mayoría.

Los sistemas electorales determinan el modo según el cual el elector emite su voto y la forma en que los votos se convierten en escaños. Los sistemas electorales influyen en el sistema de partidos políticos, en el comportamiento de los electores, en la gobernabilidad, en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en el resultado de las elecciones.

Enseña Norberto Bobbio (citado por Bovero) que la democracia moderna es la democracia representativa y la institución característica de ella es la elección, por parte de los ciudadanos, de sus representantes en las diversas instancias de gobierno o “sedes en las que son asumidas las decisiones políticas” (Bovero). El sufragio universal es condición indispensable para que un régimen político sea reconocido como democrático; “Pero la institución de las elecciones con sufragio universal puede servir como prueba de que un régimen es (ha devenido) democrático sólo a condición de que el juego político en su conjunto —y en particular la dimensión eminentemente conflictual del juego político moderno, es decir, la competencia electoral— se desarrolle bajo determinadas reglas” (Bovero).

Señala Michelangelo Bovero que para que un juego electoral pueda ser considerado como democrático debe ante todo cumplir las condiciones *formales* planteadas por las primeras cinco reglas: las que definen *quién* participa en el referido juego electoral, y las que establecen *cómo* debe llevarse a cabo. (Bovero)

En primer lugar, el sufragio debe ser *universal*, y sólo lo será si el universo de los electores comprende a todos los destinatarios de las decisiones de quienes serán elegidos; pero el universo de los electores debe coincidir con el de los elegibles; esta es la condición de inclusividad que se ha venido satisfaciendo gradualmente en diversos regímenes políticos mediante el alargamiento o universalización del sufragio en distintas etapas en un largo proceso de democratización (Bovero).

En segundo lugar el juego electoral debe ser *equitativo*, lo que significa que cada elector debe disponer de un voto el cual debe incidir o “pesar” igual que los demás en la composición del colegio de los representantes elegidos; esta es la condición de *equivalencia*, que se satisface cuando la elaboración de los resultados electorales, con base en el cómputo correcto de los votos válidos, en vista de la integración de los órganos representativos, está regulada por el principio de proporcionalidad entre las cuotas porcentuales de votos obtenidos por los diferentes grupos o listas de candidato y las cuotas porcentuales también, de los escaños asignados. (Bovero)

En tercer lugar, el juego electoral debe ser *libre* en el sentido de que la decisión del voto o sufragio por cada elector “debe poder madurar al reparo de interferencias distorsionadoras, es decir, en un contexto que permita hacer un examen comparativo equilibrado de las opiniones, propuestas, programas de los diversos grupos de candidatos”; esta es la condición de *libertad subjetiva* del ciudadano, que se satisface cuando el ciudadano tiene la garantía de pluralidad de las fuentes de información política y del acceso a ellas. (Bovero)

En cuarto lugar el juego debe también ser *libre* en el sentido de que el elector pueda ejercer su selección de entre alternativas realmente diferentes entre sí, de entre un abanico suficientemente amplio de opciones para poderse reconocer en una orientación política precisa; se trata de la condición *objetiva* de la libertad del elector que se satisface cuando esté protegido y favorecido por el ordenamiento jurídico, y haya un verdadero pluralismo político de los partidos políticos y de los movimientos sociales; en abstracto, la

selección del elector es menos libre cuando son limitadas las alternativas; en concreto, si el número de alternativas es exiguo, el elector se verá obligado a escoger entre votar por una opción política que resulta deforme en relación con sus preferencias, o bien abstenerse de votar. (Bovero)

El caso de la quinta regla del juego político, considerada como la “regla madre” de la democracia, presenta diversas complejidades; comúnmente se sostiene que el juego democrático debe resolverse determinando “quién ganó” y “quién perdió”, mediante la aplicación de la *regla de mayoría*; pero es necesario entender el significado, el alcance y los límites de esta regla: “la identificación genérica y simplificadora del núcleo esencial del régimen democrático con el ‘poder de la mayoría’; (es) una identificación que frecuentemente es asumida tácitamente como axioma”, presuponiendo que existe o debe de existir una correspondencia natural y automática entre la mayoría de los electores y la mayoría de los elegidos, por lo que Bovero considera que la “cracia” de la mayoría *no es*, en tanto tal, la democracia; “En un juego electoral democrático –dice Bovero—, esto es, respetuoso de la igualdad política de todos los ciudadanos (de la igual dignidad de todas las opiniones políticas), el principio de mayoría no tiene la tarea de otorgarle (todo) el poder a la mayoría, sino que desempeña solamente la función de un criterio muy general, con base en el cual –dicho en palabras de Bobbio— ‘se considera electo el candidato que obtiene el mayor número de votos’” (Bovero). No se debe confundir la *regla de mayoría* con el *sistema electoral mayoritario*; la función de las elecciones de acuerdo con lo anterior, no es el otorgar el poder de decisión colectiva a una parte de los ciudadanos, sino el de determinar cuál será la composición del órgano autorizado a tomar las decisiones colectivas de tal forma que todas las opiniones se encuentren representadas, sin excluir a ninguna y en sus respectivas proporciones; esta función se cumple aplicando el principio de proporcionalidad, no la regla de mayoría; en una democracia, el partido que gana la mayoría gana el *poder de orientación política*, o sea la fuerza numérica para determinar el rumbo de la legislación, pero esto no significa que tenga el poder absoluto de decisión política y que éste no sea discutible ni modificable durante el periodo de la legislatura. (Bovero)

Desde otra óptica, Josep Ma. Vallés y Salvador Martí y Puig, señalan que la ciencia política contemporánea ha venido prestando mucha atención al comportamiento

electoral; consideran que desde el punto de vista ideológico, es en el acto electoral en donde se encuentra la fuente que legitima el ejercicio del poder político en la democracia representativa; desde un punto de vista instrumental, la conducta electoral es una conducta pública, organizada, simultánea, cuantificada sobre la cual se disponen muchos datos que permiten comparar con otras conductas relacionadas con la política. (Vallés y Martí, 2016: 327)

La principal acción electoral es la emisión del voto, en la que se encuentran algunas dimensiones del comportamiento electoral: participación, orientación del voto y, volatilidad; votar o abstenerse es la primera opción que plantean las elecciones, regularmente se encuentra una cierta estabilidad en la participación, pero también se ha encontrado que no todas las elecciones son igualmente atractivas para los votantes, ya que en todos los sistemas políticos se registran elecciones que movilizan a los votantes en mayor medida que otras; las que son percibidas por los ciudadanos como de gran impacto o de mayor importancia política, han sido calificadas como elecciones de “primer orden”, en tanto que aquellas que en la percepción ciudadana son de menor importancia, y que son referidas a ámbitos local o regional, han sido calificadas como elecciones de “segundo orden”; cabe señalar que pueden darse causas coyunturales que estimulan la participación en este tipo de elecciones. (Vallés y Martí, 2016: 327 y 328)

Señalan los autores citados que el voto como conducta política es una decisión individual, y la suma de decisiones se convierte en un hecho político colectivo, y cuando las elecciones se desarrollan en condiciones de libre competencia entre diversas alternativas, el hecho político colectivo desempeña importantes funciones en el seno del sistema político; tres son las principales funciones: producir gobierno, producir representación y producir legitimidad. (Vallés y Martí, 2016: 330)

Continúan explicando los autores que venimos siguiendo, que en primer lugar, el proceso electoral permite elegir a quienes ocuparán los puestos de autoridad en las instituciones: la jefatura del estado y del gobierno, escaños en el órgano legislativo, etcétera; en segundo lugar, el voto contiene una delegación para expresar determinadas aspiraciones que los electores desean ver satisfechas mediante la acción de las instituciones; y finalmente consideran que la decisión electoral encierra un componente simbólico de primer orden, que significa la identificación con colectivos derivada de una

asociación más o menos directa entre los votantes, por su condición social, por su manera de pensar, por sus convicciones y, en términos generales, con toda la comunidad política de la que forma parte y cuyas existencia y forma de organización legitima con su voto. (Vallés y Martí, 2016: 331)

De lo expuesto hasta aquí, se infiere que los procesos electorales y las elecciones demandan de la participación política la cual está condicionada por el ejercicio de la ciudadanía, lo que no significa sólo el ejercicio de derechos político-electorales, sino que también implica el ejercicio de derechos civiles y sociales; la democracia demanda la participación política de una ciudadanía activa que se apropie del espacio público para participar en el debate, la reflexión y la propuesta; la democracia demanda también de un Estado que a través de sus instituciones de gobierno contribuya a la construcción de esa ciudadanía activa, reconociendo y respetando los derechos fundamentales de las personas, conforme a la concepción de la democracia establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la define *“no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”*.

Desde una perspectiva jurídica, la participación política y electoral encuentra su fundamento y garantía de ejercicio en las disposiciones constitucionales y legales que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los de carácter político-electoral.

## **2. La democracia constitucional**

Presentamos el marco teórico del modelo de democracia constitucional que nos obsequia Luigi Ferrajoli, que será útil para la lectura y comprensión de nuestro modelo de democracia, el que con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos adquirió elementos que lo aproximan al modelo ferrajoliano. En el modelo de democracia constitucional propuesto por Luigi Ferrajoli, la democracia se sustenta en dos principios fundamentales: la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. A partir de la idea de que la democracia constitucional demanda de una ciudadanía integral que participe de manera activa en el desarrollo de la democracia, utilizando el espacio público para la acción política mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, se presenta un estudio no exhaustivo del modelo de democracia constitucional, como marco teórico que

nos permite, reiteramos, interpretar el modelo de democracia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al que las reformas a ésta, de Junio de 2011, lo acercan al paradigma de la democracia constitucional.

En la concepción de la democracia constitucional destaca la idea de que al pueblo no sólo le corresponde el ejercicio de los derechos político-electorales para la elección de un gobierno representativo sino que además le pertenecen el conjunto de los derechos fundamentales —civiles, liberales, políticos y sociales— frente al poder del Estado, a los cuales los poderes de la mayoría, derivados de la democracia plebiscitaria están sometidos. Esto significa que la democracia existe a través de los derechos.

Por otra parte, la democracia constitucional “es un modelo de democracia fruto de un cambio radical del paradigma acerca del papel del derecho producido en los últimos cincuenta años”<sup>1</sup> (Ferrajoli, 2010: 28). Esta concepción de la democracia surge del redescubrimiento del “significado de la constitución como límite y vínculo de los poderes públicos” (Ferrajoli); lo anterior significa también el redescubrimiento del “valor de la constitución como norma dirigida a garantizar la división de poderes y de derechos fundamentales de todos” (Ferrajoli, 2010: 28).

Así, Ferrajoli establece que las garantías constitucionales de los derechos fundamentales son también garantías de la democracia; el concepto garantías designa “las prohibiciones o las obligaciones correspondientes a las expectativas positivas o negativas normativamente establecidas, por lo común, en forma de derechos subjetivos” (Ferrajoli, 2010: 39). Garantías negativas son las prohibiciones correspondientes a expectativas negativas: los derechos a no ser lesionados por otros, del derecho de propiedad a los derechos de libertad y al derecho a la vida; son garantías positivas las obligaciones correspondientes a las expectativas positivas: de los derechos a prestaciones de otros, a los derechos de crédito y a los derechos sociales (Ferrajoli, 2010: 39 y 40), y explica que “las garantías constitucionales son las garantías de la rigidez de los principios y de los derechos constitucionalmente establecidos que gravan de manera específica a los poderes del Estado” (Ferrajoli, 2010: 40). De acuerdo con lo anterior, el garantismo es el conjunto de procedimientos y recursos para hacer efectivos la limitación de los poderes públicos que

---

<sup>1</sup> Ferrajoli señala como fecha de este cambio el año 1945 o el quinquenio 1945 -1949, periodo inmediato al fin de la Segunda Guerra Mundial, que significó la derrota del nazismo y del fascismo.

determina además lo que dichos poderes deben decidir y lo que no deben decidir; el garantismo es el rasgo estructural y esencial más característico de la democracia.

### **3. El concepto de democracia en la Constitución Mexicana**

Con apoyo en el anterior marco conceptual, presentamos una exploración de la concepción de la democracia establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se define, como ya vimos, no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino además como sistema de vida fundado en el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada por el Poder Constituyente permanente, mediante “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Junio de 2011 y en vigor a partir del día siguiente, estableció diversos principios para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales y ha significado una importante acción para el fortalecimiento en México de los derechos humanos o fundamentales –siguiendo la concepción de Ferrajoli— ya que supone el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la necesidad de emprender la vía de la denominada “acción positiva del Estado”.

Cabe destacar dos particularidades muy importantes en esta reforma, señalados por José Luis Caballero Ochoa ([biblio.juridicas.unam,s/d](http://biblio.juridicas.unam.mx/s/d)), en virtud de que constituyen nuevas bases de sustentación para una democracia constitucional:

1. El fortalecimiento del concepto de los derechos humanos o fundamentales, al establecer el principio de su goce por todas las personas y la garantía para su protección, conforme a los principios de “interpretación conforme” y “pro persona”, y
2. La apertura al derecho internacional para la protección, defensa y restablecimiento de los derechos humanos.

Hay que recordar con Luigi Ferrajoli que los derechos fundamentales son “aquellos derechos universales y, por ello, indispensables e inalienables que resultan atribuidos



directamente por las normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos capaces de obrar” (Ferrajoli,

Así, con las anteriores particularidades que destacamos de la reforma referida, se sientan bases para que las garantías, tanto liberales como sociales, que son expresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al Estado, se constituyan también en garantías de la democracia en nuestro país, integrando de esta forma la dimensión sustancial de la democracia, que se añade a la dimensión formal de la democracia, lo que significa que la democracia no se reduce a lo electoral, sino a su contenido entre cuyas acciones se encuentra la construcción de ciudadanía participativa.

La democracia en su dimensión sustancial es una estructura jurídica porque en la Constitución se establecen las bases para la conformación del Estado Mexicano a partir de un principio democrático: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo según su artículo 39, y de este reconocimiento deriva una estructura jurídica democrática: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y ello legitima su ejercicio; el Estado Mexicano, como institución organizadora de la sociedad tiene su origen en la soberanía popular; es por tanto, una estructura jurídica democrática, porque se origina en la voluntad soberana del pueblo poseedor originario del poder público.

Nuestro sistema constitucional concibe a la democracia como un régimen político constituido por una diversidad de instituciones y procedimientos que hacen posible la conformación de un gobierno representativo que actúe en beneficio del interés colectivo. La forma de gobierno, según el artículo 39 de la Constitución General de la República, es decisión soberana del pueblo, y éste ha definido la forma de su organización política y la manera de ejercicio de su propia soberanía; así lo ha expresado en los artículos 40 y 41 de la mencionada Constitución.

#### **4. Ciudadanía y participación electoral**

Señala Antonio Enrique Pérez-Luño, que desde la perspectiva histórica, la ciudadanía ha sido uno de los motores de la historia, en virtud de que junto a su concepción como producto del desarrollo y del conflicto de ideologías, creencias y religiones, y junto también a la posición materialista que la considera como el resultado de la lucha de clases, o sea el enfrentamiento entre poseedores y no poseedores de bienes económicos, se encuentra una tercera concepción producto del devenir histórico que concibe a la

ciudadanía como la consecuencia de la tensión entre la ciudad y el campo, entre la vida urbana y la vida rural.

Explica Pérez Luño:

Ciudadanía, derechos fundamentales y Estado de derecho no son sólo categorías jurídico-políticas que emergen en un mismo clima histórico, son realidades que se condicionan e implican mutuamente. El Estado de derecho es la forma política en la que los poderes actúan divididos y sometidos al imperio de la legalidad que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos fundamentales constituyen el fundamento de legitimidad del Estado de derecho y el contenido de la ciudadanía, la ciudadanía, a su vez, es el cauce de participación política en el Estado de derecho, a través del ejercicio de los derechos fundamentales. (Pérez, s/d: 264)

La ciudadanía significa el vínculo de pertenencia a un Estado de derecho y el ciudadano será la persona física a la que se atribuye un conjunto de derechos y deberes; en esta etapa de la evolución del concepto si bien se destaca la importancia de la participación política no existe una distinción cualitativa entre este derecho y el conjunto de los derechos y los deberes que otorgan la categoría de ciudadano (Pérez, s/d: 266).

Será en un estadio posterior cuando se profile la distinción entre ciudadanía en sentido genérico y ciudadanía en sentido estricto, en el primer sentido significó el conjunto de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, en tanto que el sentido estricto se refirió exclusivamente a los derechos políticos, o sea aquellos derechos que facultan a los ciudadanos a ser electores y elegidos, lo que implica una participación activa en el curso y la determinación de la política estatal.

##### **5. Los derechos político-electorales y el derecho al voto**

Los derechos políticos-electorales son las prerrogativas con que cuentan los ciudadanos para participar en la integración de los poderes públicos del Estado y que los facultan para intervenir de forma individual o colectiva, directamente o a través de la representación en las decisiones de gobierno.

Son considerados derechos político-electorales el derecho a votar para elegir a los representantes populares y el derecho a ser votado para ocupar un cargo de elección popular, y junto con ellos igualmente son derechos político-electorales el derecho a ser incluido en las listas nominales de electores y a obtener la credencial para votar con fotografía, así como todos aquellos derechos relacionados con la participación en la vida política del país, como el de reunión pacífica para tratar asuntos políticos, el de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, el de ser postulado como candidato para ocupar un cargo de elección popular por los partidos políticos, el de postularse para el mismo efecto por la vía de candidaturas independientes, así como aquellos derechos que adquieren un carácter político cuando se encuentran relacionados con el ejercicio de alguno de los referidos, como son el derecho de libertad de pensamiento y de expresión, de petición, de información, de libre tránsito, etcétera, todos éstos considerados como derechos fundamentales.

En este escenario, la idea de la justicia electoral en el desarrollo de la función electoral y en particular en el desarrollo de los procesos electorales es fundamental. La función electoral es una función permanente, a cargo del Instituto Nacional Electoral, y en términos generales, es el conjunto de actividades relacionadas con la administración de los procesos electorales y la participación en ellos de los diversos actores políticos; está constituida por un complejo de actividades que en diversas etapas —que se desenvuelven tanto durante el desarrollo de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios, como en los periodos que median entre uno y otro proceso ordinario— garantizan la renovación pacífica y periódica de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El ejercicio de la función electoral debe desarrollarse conforme a los principios de constitucionalidad y de legalidad, en esta virtud, la concepción de la justicia electoral presenta diversas vertientes establecidas en la Constitución y en la ley:

- a) El establecimiento de un sistema de medios de impugnación que garantice la constitucionalidad y la legalidad de cada uno de los actos y resoluciones que la autoridad electoral emita en el ejercicio de la función electoral, así como de cada una de las etapas de los procesos electorales.
- b) La determinación de las faltas en que incurran los órganos y funcionarios electorales y los diversos actores políticos, ciudadanos, organizaciones civiles,

políticas y sindicales, ministros de culto, concesionarios de radio y televisión y en general todos los sujetos obligados en términos de las leyes electorales, y la determinación de las sanciones que deban imponerse en el ámbito administrativo.

- c) La definición de conductas que afecten el desarrollo de la función y de los procesos electorales y que por su gravedad sean tipificados como delitos , así como las facultades de prevención y de sanción de tales conductas que el Estado ejecute en el ejercicio del *jus puniendi*, para salvaguardar el interés social.
- d) El establecimiento de condiciones de equidad en la contienda electoral, que garantice igualdad de oportunidades para los diversos partidos políticos y sus candidatos y para los candidatos independientes o no postulados por partidos políticos.

Es en la primera vertiente en la que se encuentra inscrito el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Es sobre esta vertiente que presentamos las consideraciones siguientes.

En torno a lo anterior, Juan José Franco Cuervo destaca la trascendencia de la tutela jurídica de los derechos político-electorales, pues en la medida de su protección se protege la voluntad ciudadana mediante la protección al derecho al voto, lo que permite la custodia de los demás derechos humanos, con lo que se abona a alcanzar la anhelada democracia, y precisa que “se debe destacar el hecho de que de todos los derechos listados, sin duda alguna el derecho al voto es seguramente el más importante de todos los derechos políticos del ciudadano, toda vez que a través de él, se accede al poder público y a la toma de decisiones colectivas”.

Desde el punto de vista constitucional, los derechos político-electorales son el “grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado”. En otras palabras, son “el conjunto de facultades que hacen posible la participación del ciudadano en la vida política del Estado al cual pertenecen”. (Franco Cuervo)

En la Constitución y en la legislación mexicanas, el voto se considera una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, es decir un derecho exclusivo, que les permite participar en la integración de los poderes públicos, pero al mismo tiempo se concibe como una obligación, y en este caso es un deber de los ciudadanos para con la sociedad de la que forma parte. Para la protección del derecho a votar y además para garantizar que el voto emitido por cada ciudadano cuente en la expresión de la voluntad popular, tanto la expresión de mayorías como la expresión de minorías, se ha configurado un sistema de justicia electoral, del cual como ya hemos señalado, destacamos la primera de las vertientes que líneas atrás hemos enunciado.

## **6. Los medios de defensa legal del derecho al voto**

Así, en el sistema jurídico mexicano en los últimos años, se han creado diversos mecanismos legales de control de la constitucionalidad y de la legalidad y en materia electoral, el más importante es el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que con la promulgación en 1996 de la ley de la materia, es decir, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, garantizó la tutela jurídica del derecho al voto, que había sido excluida del juicio de amparo, mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, establecido en el referido cuerpo legal. En opinión de Huber Oléa y Jean Paul Contró, citados por Juan José Franco Cuervo:

es el primer medio de impugnación a través del cual el ciudadano en su esfera jurídica competencial del ámbito personal, es decir, desde la esfera de los derechos político electorales del ciudadano, puede hacer valer medios de defensa en contra de actos o violaciones legales o constitucionales que vulneren su esfera jurídica en este ámbito

El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales ha cobrado una relevancia especial pues permite al ciudadano, impugnar actos o resoluciones que afecten su derecho fundamental a votar, a ser votado o de asociarse políticamente. El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano es un procedimiento que, con las palabras de los autores citados:

[...] tiene como finalidad ejercer el control de la constitucionalidad sobre actos de las autoridades electorales federales y de las entidades federativas para garantizar el pleno goce de las prerrogativas ciudadanas conferidas por la constitución, sin embargo, a través de sendas ejecutorias emitidas por la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, la protección de este medio de impugnación se ha ampliado a horizontes nuevos, en lo que nos hemos permitido denominar ‘la nueva época del control jurídico electoral’, la cual ya no solamente abarca control sobre actos de órganos electorales, sino control jurídico de los actos que se suscitan al interior de los partidos políticos que vulneren derechos de los afiliados, dado que una violación a este tipo de derechos, vulnera de manera indirecta el derecho a la libertad de asociación política.

Es preciso señalar que el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, materializa la vertiente del sistema de justicia electoral, que garantiza que en el desarrollo de los procesos electorales la actuación de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad, dando definitividad a cada una de las etapas del proceso electoral, y en última instancia garantiza la validez y legitimidad del proceso electoral y el resultado de las elecciones.

## **7. Conclusión**

Las elecciones son la fuente de legitimidad del gobierno y de la representación en los órganos legislativos cuando son llevadas a cabo con imparcialidad, transparencia y con justicia. De ahí que la idea de la justicia en el desarrollo de la función electoral y en particular en el desarrollo de los procesos electorales sea fundamental.

En más de un sentido, los conceptos de participación ciudadana y democracia se encuentran estrechamente vinculados; la democracia es un proceso que demanda para su construcción de una ciudadanía participativa y activa en el ejercicio de sus derechos democráticos.

El nuevo paradigma de democracia constitucional presentado por Luigi Ferrajoli, conforme al cual puede darse lectura a la concepción de la democracia establecida en la Constitución Mexicana de 1917, lectura que es posible en virtud de la reforma en derechos humanos aprobada por el Constituyente Permanente y promulgada en Junio de 2011, y que

significó un importante avance en el fortalecimiento de los derechos humanos en México, y el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la necesidad de emprender la vía de la denominada “acción positiva del Estado”. Otro aspecto que destaca en esta reforma a la Constitución es el establecimiento del principio “pro persona”, conforme la cual se ordena favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia conforme a los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad.

Conforme con lo anterior, la democracia debe fundarse en la adhesión a valores de la dignidad de la persona humana y el desarrollo de la libertad y de la justicia.

En este contexto, el derecho al voto, considerado como un derecho humano o fundamental, representa una forma básica de expresión ciudadana para la integración de los poderes públicos y de participación en las decisiones colectivas. Es la expresión que deriva de la participación ciudadana en un diálogo público en el cual puede expresarse, criticar y discutir en un marco de libertad política.

Y es por eso que debe ser tutelado jurídicamente, desde la etapa misma de materialización de las condiciones para ejercerlo, que inicia con el registro al padrón electoral, pasando por el ejercicio de una serie de acciones como recibir la credencial para votar y la participación en los procesos electorales, tanto desde la posición ciudadana de elector como la de candidato a ocupar un cargo de elección popular.

El ejercicio de la función electoral y de los procesos electorales debe desarrollarse conforme a los principios de constitucionalidad y de legalidad. De ahí la necesidad de contar con un sistema de justicia electoral eficaz para la prevención y resolución de las controversias que surjan en el desarrollo de las funciones referidas.

El concepto justicia electoral tiene una significación amplia y diversas vertientes que se refieren a las acciones, procedimientos y resoluciones relativas a los procesos electorales para que se ajusten a la constitucionalidad y a la legalidad. Destaca su función protectora y de restablecimiento de los derechos político-electorales al otorgar a los diversos actores políticos las acciones pertinentes cuando consideren que sus derechos político-electorales han sido violados.

El sistema de justicia electoral debe garantizar la constitucionalidad y legalidad de todo el ciclo electoral, pues la cobertura con un sistema de medios de impugnación accionable en cada una de las etapas de este ciclo, garantiza por una parte que los

procedimientos electorales y sus resultados cumplan con el orden jurídico, y por otra parte el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia.

En este entramado de acciones, en las que deben darse las condiciones para la participación en las elecciones libremente y para que el ciudadano ejerza su derecho de votar de manera libre y secreta, debe existir también la garantía de protección y defensa de este derecho fundamental, el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforma un conjunto sistemático estructural y funcionalmente idóneo para garantizar al más alto nivel la protección de los derechos políticos y electorales de los diversos actores políticos, así como brindarle legitimidad tanto a la función electoral como a los procesos electorales.

Bovero, Michelangelo. s/d, “¿Elecciones sin democracia? ¿Democracia sin elecciones? Sobre las formas de la participación política”, disponible en [www.corteidh.or.cr/tablas/r33916.pdf](http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33916.pdf) (28/07/2018)

Caballero Ochoa, José Luis. s/d, “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (Artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución)”, disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?\=3033> (25/07/2013).

Ferrajoli, Luigi. 2010. *Democracia y garantismo*. Madrid: Trotta.

Ferrajoli, Luigi (s/d). “Qué son los derechos fundamentales” (<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?\=3033>, s/d)8

Pérez Luño, Antonio Enrique. s/d, “La ciudadanía en la sociedades multiculturales”, en *ciudadanía y derecho en la era de la globalización*, Alfonso de Julios-Campuzano (Editor), Madrid: Edit. Dykinson, S.L.

Vallés, Josep Ma. (2016). *Ciencia política. Un manual*, México: Ariel.



